



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-004-2019-00458-01 (O2-22-361)  
**Accionante:** MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN  
**Accionada:** AFP COLFONDOS S.A.  
**Procedencia:** JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No. 057  
**Asunto:** INTERESES MORATORIOS - DEVOLUCIÓN DE SALDOS

En Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-004-2019-00458-01 (O2-22-361), instaurado por MARÍA ADELA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN en contra de AFP COLFONDOS S.A., con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte actora, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 13 de julio de 2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### **1. ANTECEDENTES**

La señora MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad AFP COLFONDOS S.A., a efectos de que se condene a la mencionada administradora a reconocer y pagar los intereses moratorios contenidos en el artículo 12 del Decreto 1748 de 1995, regulados por los Decretos

1474 y 1513, ambos de 1998; sanción de mora que solicita se conceda a partir del mes de junio de 2017, y hasta la fecha en que efectivamente fue entregada la devolución de saldos a su favor ese mismo mes del año 2019, junto con la indexación.

En respaldo de sus aspiraciones señala que se encuentra afiliada el RAIS administrado por la AFP COLFONDOS S.A., obrando en su cuenta de ahorro individual – CAI, la suma de \$44.969.685, suma que incluye aportes y el valor del bono pensional. Refiere que el 04 de mayo de 2017, presentó ante la AFP enjuiciada la solicitud con miras a obtener la devolución de saldos que se encontraran acreditados en su CAI, incluyendo el valor del bono pensional; sin embargo, dicha solicitud solo fue atendida una vez transcurrido el término de un mes, lo que a su juicio se causa a su favor y a cargo de la AFP COLFONDOS S.A., los intereses de mora deprecados.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La demanda se admitió el 19 de julio de 2019 (pág.53, doc.01, carp.01), y se notificó a la demandada AFP COLFONDOS S.A., el 17 de octubre de esa anualidad (pág.57, doc.01, carp.01), la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aceptando como ciertos los hechos que hacen referencia a la afiliación al RAIS de la promotora y la devolución de saldos entregada, negando la veracidad de los demás hechos descritos por la promotora de la litis. En su defensa, propuso con el carácter de perentorias, las excepciones que individuó como inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, carencia de acción, falta de causa en las pretensiones de la demanda, falta de acreditación de los requisitos legales para el reconocimiento de la devolución de saldos, imposibilidad de imponer simultáneamente condena por indexación e intereses moratorios, compensación, prescripción y la innominada (págs.62 a 83, doc.01, carp.01).

### **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 13 de julio de 2021 (docs.06 a 07, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió absolver a la demandada AFP COLFONDOS S.A. de las pretensiones impetradas en su contra por parte de la señora MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN, gravándola en costas a la demandante.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de aludir a las actuaciones desplegadas por la sociedad accionada a partir del momento en que la señora MARÍA ADELFA

RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN presentó la reclamación de la pensión por vejez y la devolución de saldos, no dio por demostrada la mora por parte de la AFP COLFONDOS S.A., sino que por el contrario, afirmó que la administradora del RAIS atendió la solicitud de la prestación subsidiaria de devolución de saldos en un término razonable (minuto 22:07 a 44:26, doc.06, carp.01).

### 1.3. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses de MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN, la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta en su favor, atendiendo que no fue objeto de alzada.

### 1.4. Trámite de Segunda Instancia

El grado jurisdiccional de consulta se admitió el 03 de octubre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 10 de del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

La vocera judicial de la AFP COLFONDOS S.A. (doc.04, carp.02), presentó alegaciones pertinentes solicitando confirmar la decisión de primer grado pues a su juicio no existe mora en el reconocimiento de la devolución de saldos, teniendo en cuenta que *“...[l]a demandante radicó solicitud de pensión de vejez el día 21 de febrero de 2017, petición que fue resuelta por COLFONDOS mediante comunicado NO. BP-R-I-L-12807-17 del 04 de mayo de 2017, solicitando a la actora información adicional. Seguidamente, mi representada remitió al demandante oficio No. BP-R-I-L-19911-12-17 del 06 de diciembre de 2017, a través del cual se le indicó que “Una vez el bono pensional se encuentre finalizado, retomaremos el estudio de su pensión de vejez”. Sin perjuicio de lo anterior, es importante precisar que, la demandante diligenció declaración jurada para devolución de saldos y/o redención anticipada de bono pensional por no pensión el día 16 de abril de 2019...”*

Aunado a lo anterior sostiene que *“...la norma que pretende hacer valer como fundamento jurídico, no es aplicable al caso en concreto y mucho menos a mi representada, puesto que las mismas hacen referencia al emisor de bono pensional como al responsable de cuota parte...”*; la demandante guardó silencio durante el término de traslado que le fuera otorgado.

## 2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la pretensora señora MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN, conforme con el artículo 69 del CPTSS, al resultarle totalmente adversa la decisión de primera instancia y no haber sido impugnada.

## **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si a la demandante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora de que trata el artículo 12 del Decreto 1748 de 1994, compilado en el artículo 2.2.16.1.12 del Decreto 1833 de 2016, para lo cual se determinará **i.** La definición, conformación y redención de los bonos pensionales como parte integrante del capital de la CAI; **ii.** Los sujetos que intervienen en la autorización y emisión de los bonos pensionales; **iii.** Los términos legales para el pago de los bonos pensionales, y; **iv.** Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la materia.

## **2.2. Sentido del Fallo**

La Sala confirmará la decisión de primer grado, considerando que la interpretación plausible del Decreto 1748 de 1994, compilado en el Decreto 1833 de 2016, no impone en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones, el reconocimiento y pago de los intereses de mora a la tasa efectiva anual; sanción que, conforme con el artículo 2.2.16.1.22 del citado Decreto 1833 de 2016, solo es atribuible al emisor o al responsable de cuota parte del bono pensional; calidad que no detentan las administradoras del régimen individual con solidaridad, entidades que por el contrario, y, por expresa disposición legal, son sujetos de otras medidas sancionatorias por el incumplimiento del plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensional, sin que resulte jurídicamente procedente, extender a la AFP demandada, los efectos sancionatorios reservados a otras entidades del SGSSP so pretexto de una ponderación veleidosa del ordenamiento jurídico.

## **2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado**

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan

la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que la señora MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN nació el 21 de diciembre de 1958 (pág.10, doc.01, carp.01); que el 21 de febrero de 2017 la actora solicitó el reconocimiento de la pensión por vejez ante la AFP COLFONDOS (pág.73 a 77, doc.01, carp.01); que el 04 de mayo de 2017 el Coordinador de Pensiones de la enjuiciada le solicitó a la demandante allegar “...copia de la última cotización realizada a salud, soporte que está solicitando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público oficina de bonos Pensionales, para proceder con el trámite de su bono pensional...” (pág.78, doc.01, carp.01); que el 05 de marzo de 2018 se le informa a la actora que el bono pensional aún no se encuentra finalizado “...ya que está pendiente la acreditación en su cuenta de ahorro individual, lo cual es indispensable para poder tomar la decisión pensional...” (págs.80 a 83, doc.01, carp.01).

Adicionalmente, no se discute que la señora MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN diligenció el formulario para el reconocimiento y pago de la devolución de saldos el pasado 16 de abril de 2019 (pág.79, doc.01, carp.01) y que el 28 de mayo de 2019 la accionada atendió esta solicitud por valor de \$44.969.685 (págs.7 a 9, doc.01, carp.01).

Siendo ello así, memora la Sala que la promotora de la Litis ubica como punto nodal del disenso la presunta mora injustificada por parte de la demandada AFP COLFONDOS S.A. en la gestión y ulterior trámite de la devolución de saldos, así como en la emisión y pago del bono pensional del que es titular.

### **2.3.1.1 Las Fuentes de Financiación y el Capital Necesario que Conforman la Pensión de Vejez en el RAIS**

De acuerdo con lo señalado por el artículo 63<sup>1</sup> de la Ley 100 de 1993, los recursos provenientes de las cotizaciones, bien obligatorias, o bien voluntarias<sup>2</sup>, deberán ser abonadas a la *cuenta individual de ahorro pensional*, además, con la correlativa obligación de la AFP, de “...*enviar a sus afiliados, por lo menos trimestralmente, un extracto que registre las sumas depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el monto de las comisiones cobradas y de las primas pagadas, consolidando las subcuentas que los afiliados posean en los diferentes Fondos de Pensiones administrados*”; precisión que resulta necesaria para la correcta comprensión del contenido del artículo 68 del mismo estatuto, que reza “...[l]as pensiones de vejez se financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima”, y sin perjuicio, claro está, del pago del cálculo actuarial o título pensional a cargo de los empleadores que, en época pretérita, y previo a la subrogación de los riesgos de invalidez, vejez y muerte en el Instituto de Seguros Sociales, asumían directamente la obligación prestacional.

### 2.3.1.2. Bonos pensionales tipo A: conformación y redención.

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 115 de la Ley 100 de 1993 y 1° del Decreto 1299 de 1994, “...*[l]os bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones...*”, y por tanto constituyen, a la par de los aportes obligatorios en el SGSSP, los recursos necesarios para el financiamiento de la prestación pensional. Es así, que conforme con los lineamientos consagrados en el SGSS<sup>3</sup>, estos bonos pensionales son instrumentos de deuda pública nacional, que son expedidos a los afiliados para los fines arriba anotados por parte **a.** La Nación; **b.** Las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, y; **c.** Por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado

<sup>1</sup> **Ley 100 de 1993, artículo 63. Cuentas individuales de ahorro pensional.** Las cotizaciones obligatorias y voluntarias se abonarán a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado a prorrata del o los Fondos de Pensiones que este elija o a los que sea asignado de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, de forma que la cuenta estará conformada por las subcuentas que incorporarán lo abonado en cada fondo. Las administradoras deberán enviar a sus afiliados, por lo menos trimestralmente, un extracto que registre las sumas depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el monto de las comisiones cobradas y de las primas pagadas, consolidando las subcuentas que los afiliados posean en los diferentes Fondos de Pensiones administrados. Las sumas existentes en las cuentas individuales de ahorro pensional, sólo podrán ser utilizadas para acceder a las pensiones de que trata este título, salvo lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la presente ley. PARÁGRAFO. Para todos los efectos, cuando se haga relación al concepto de cuenta individual o cuenta individual de ahorro pensional, tal referencia corresponderá a la suma de las subcuentas individuales que posea el afiliado en cada uno de los fondos.

<sup>2</sup> **Ley 100 de 1993, artículo 62. Cotizaciones voluntarias.** Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores superiores a los límites mínimos establecidos como cotización obligatoria, con el fin de incrementar los saldos de sus cuentas individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado.

<sup>3</sup> **Ley 100 de 1993, artículo 121. Bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación.** La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, de la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera otra Caja, Fondo o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades. Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha.

que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora<sup>4</sup>.

Así, para el caso de los afiliados que se trasladen del RPMPD al RAIS y que acrediten a la fecha de dicho traslado haber cotizado al menos 150 semanas<sup>5</sup>, tendrán derecho a la emisión del bono pensional identificado como “Bono tipo A”, el que dicho sea de paso, cuenta con dos modalidades, de acuerdo con la fecha donde se verifique su primera vinculación laboral. De tal manera que los bonos tipo A de modalidad 1, serán aquellos que “...se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 1992<sup>6</sup>, a contrario sensu, los de modalidad 2, se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1o. de julio de 1992<sup>7</sup>”.

### **2.3.1.3 Bonos pensionales tipo A: sujetos que intervienen en la autorización y su emisión.**

Conforme con lo normado por los artículos 119 de la Ley 100 de 1993 y 14 y 15 del Decreto 1299 de 1994, los principales actores o sujetos que participan en la emisión de bonos pensionales tipo A, corresponden al emisor y al contribuyente. Ahora, como anticipara la Sala en líneas anteriores, se entiende por emisor a **i. La Nación; ii. La administradora del RPMPD<sup>8</sup>; iii. Las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional; iv. Empresas privadas o públicas, o cajas o fondos de previsión del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, y; v. Las Cajas, fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.**

A su turno, los contribuyentes son aquellas “...*entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado el beneficiario del bono pensional, las que deberán contribuir a la entidad emisora con la cuota parte correspondiente al valor de redención del mismo*<sup>9</sup>”.

<sup>4</sup> Ley 100 de 1993, artículo 118.

<sup>5</sup> **Decreto 1299 de 1994, artículo 2, parágrafo 1°.** Los afiliados de que trata el literal a del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas continuas o discontinuas, no tendrán derecho a bono. Para efecto de contabilizar las semanas previstas en el presente parágrafo se tendrá en cuenta, la suma del tiempo durante el cual el trabajador estuvo cotizando al ISS, a alguna caja o fondo de previsión del sector público, prestando servicios como servidor público, vinculado mediante contrato de trabajo a una empresa o empleador del sector privado que tenía a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, o afiliado a una caja o fondo de previsión del sector privado.

<sup>6</sup> Decreto 1748 de 1995.

<sup>7</sup> *Ibíd.* Decreto 1299 de 1994, artículo 14.

<sup>8</sup> Decreto 1299 de 1994, artículo 17. El instituto de Seguros Sociales emitirá el bono pensional de los afiliados al Sistema General de Pensiones en relación con sus afiliados que hubiesen ingresado por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 1o. de abril de 1994.

<sup>9</sup> Decreto 1299 de 1994, artículo 15.

En línea con lo anterior y a pesar de no intervenir de manera directa en la emisión y pago del bono pensional tipo A, deviene incontrovertible que los empleadores privados o públicos<sup>10</sup>, el afiliado y la administradora del RAIS, también prestan su colaboración dentro de este trámite, *verbi gratia*, con la expedición del certificado de tiempo de servicios y salarios devengados, la aprobación de la historia laboral, y en el caso de las AFP, como el principal interlocutor entre el afiliado y las entidades responsables en la emisión y pago de la cuota parte del bono, pues conforme con lo señalado en el artículo 20 del Decreto 656 de 1994 y 2.2.16.2.1.6 del Decreto 1833 de 2016, debe “...adelantar por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención”.

En síntesis, en la gestión y el trámite de expedición del bono pensional, participan además del emisor y el contribuyente, el afiliado, los empleadores públicos o privados a los cuales les prestó servicios y la AFP a la que se encuentra vinculado; cada uno con responsabilidades y deberes específicos y claramente diferenciables<sup>11</sup>.

#### **2.3.1.4 Bonos pensionales tipo A: términos legales para su pago y consecuencias derivadas de su incumplimiento.**

Previo a determinar el plazo legalmente establecido para la emisión del bono pensional tipo A, necesario se muestra identificar las modalidades y los momentos de redención que el

<sup>10</sup> **Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.2.1.6.** Cuando un empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, especificará lo siguiente: a) Nombre del trabajador, tipo y número de su documento de identidad; b) Número o números de afiliación ante el ISS, si es el caso; c) Razón social del empleador, NIT, y número patronal ante el ISS, si es el caso; d) Nombre y NIT de la caja o fondo de previsión a la cual aporta o aportaba, si es el caso. Si hubo más de una, especificar fecha; e) Fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para el empleador. f) Fechas de ingreso y retiro; g) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones; h) Salario a 30 de junio de 1992, si estaba activo a esa fecha; i) Salario a la fecha de desvinculación, si ésta fue anterior al 30 de junio de 1992; j) Salario a la víspera de la fecha de iniciación de la licencia no remunerada o suspensión, y cuál fue esta fecha, si el 30 de junio de 1992 se hallaba suspendido o en licencia no remunerada; k) Salarios devengados y número de días laborados, mes por mes, si la vinculación ocurrió después del 30 de junio de 1992; l) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo; m) Nombre y documento de identificación de la persona que expide la certificación.

<sup>11</sup> **Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.7.4. Entidades administradoras.** a) El ISS respecto de los bonos tipo B; b) La AFP a la cual esté afiliado el trabajador, respecto a los bonos tipo A, y; c) Las compañías de seguros, en el caso de los planes alternativos de pensiones. Corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención. Las administradoras estarán obligadas a verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, de tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, sólo sea necesario proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento de las cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52. Así mismo, el afiliado también podrá solicitar directamente las certificaciones, las cuales deberán ser previamente verificadas por la administradora. Las entidades administradoras quedan eximidas de allegar certificaciones, y el empleador de suministrarlas individualmente, cuando el bono vaya a ser calculado por la OBP, siempre que la información esté incluida en el último archivo laboral masivo que se haya entregado a esta oficina, salvo cuando el trabajador solicite expresamente una certificación individual más amplia. Las entidades empleadoras deberán establecer un procedimiento interno de emisión de certificaciones que permita su verificación y garantice su seguridad. El procedimiento deberá contener al menos los siguientes aspectos: a) La entidad deberá numerar las certificaciones expedidas; b) Las certificaciones expedidas deberán registrarse en un archivo interno de la entidad; c) El representante legal de la entidad deberá designar, bajo su responsabilidad, un funcionario competente para la emisión de certificaciones. Así mismo, los destinatarios de la información podrán solicitar al representante legal el nombre y documento de identidad de los funcionarios que hubieran estado facultados para expedir las certificaciones ya recibidas. Las Administradoras deberán mantener en sus archivos, utilizando los medios idóneos que garanticen su conservación, las diferentes certificaciones que sirvieron de base para las solicitudes de bono pensional que realizaron a los emisores. El emisor podrá solicitarlas en cualquier momento. Dichos documentos deberán conservarse por lo menos durante veinte (20) años contados a partir de la expedición del bono pensional."



legislador ha establecido, para así conocer puntualmente el hito a partir del cual se hace exigible el pago de estos recursos y con ello, las sanciones por incumplimiento del término legalmente concedido para tal propósito.

En línea con lo anterior, el artículo 11 del Decreto 1299 de 1994, indica que “...[e]l bono pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional; 2. Cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia; 3. Cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993”; normatividad cuya intelección sigue los lineamientos de lo estatuido por los artículos 2.2.16.2.1.1, 2.2.16.1.20 y 2.2.16.1.21 del Decreto 1833 de 2016, que fijan como fecha normal del redención del bono, aquella cuando el beneficiario del bono cumple 62 años de edad si es hombre, o 60 si es mujer; la fecha cuando se alcanzó 500 semanas después de la fecha de corte<sup>12</sup>, “...si a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones el beneficiario del bono tenía 55 o más años de edad si es hombre, o 50 o más si es mujer...”, o bien la fecha en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo que trabajara ininterrumpidamente a partir de fecha de corte.

Al momento que se solicite la devolución de saldos, el prolijo compendio normativo que regla la materia, califica esta redención como anticipada, siempre y cuando “...no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario<sup>13</sup>”; distinción que resulta relevante, toda vez que en este último caso y por razones atendibles, la redención anticipada del bono se efectúa previa solicitud de parte del fondo de pensiones, mismo que debe dar cuenta de la causal de redención a la que se acude.

Efectuadas las anteriores precisiones, establece el artículo 2.2.16.1.22 del Decreto 1833 de 2016 que “...[e]l emisor pagará el bono a su legítimo tenedor dentro del mes siguiente a la fecha en la cual reciba de éste la solicitud de pago en la forma que el emisor haya establecido. Para los bonos tipo A con redención normal no se requiere solicitud y se pagarán dentro del mes siguiente a FR”; de no cumplirse este plazo, el emisor<sup>14</sup> o el contribuyente<sup>15</sup>, deberá,

<sup>12</sup> Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.1.13. Determinación de la fecha de corte, FC. 1. La fecha de corte, FC, será: a) Para bonos tipo A, la fecha de traslado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. b) Para bonos tipo B, la fecha de traslado al ISS.

<sup>13</sup> Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.1.21. Redención anticipada de los Bonos. Habrá lugar a la redención anticipada de los bonos cuando se dé una de las siguientes circunstancias: 1. Para bonos tipo A que no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario, o bien la devolución del saldo en los casos previstos en los artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de 1993

<sup>14</sup> La Nación, la administradora del RPMPD, las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional; las empresas privadas o públicas, o cajas o fondos de previsión del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, y las Cajas, fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.

<sup>15</sup> Entidades pagadoras de pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado el beneficiario del bono pensional, las que deberán contribuir a la entidad emisora con la cuota parte correspondiente al valor de redención del mismo

según corresponda, reconocer de manera automática y a título de sanción, intereses de mora a partir de la fecha límite, a la tasa establecida en la fórmula contenida en el artículo 2.2.16.1.12 ídem.

En síntesis y de cara a los argumentos arriba esbozados, importa señalar por la Sala, sin más elucubraciones, que los recursos para la financiación de la pensión de vejez en el RAIS, provienen de diferentes fuentes así: **i.** Los aportes o cotizaciones obligatorias; **ii.** Los aportes voluntarios; **iii.** Los rendimientos financieros; **iv.** Los bonos pensionales, y **v.** La reserva actuarial o título pensional a cargo de los empleadores.

### 2.3.1.5. De la Devolución de Saldos

El artículo 66 de la Ley 100 de 1993, contempló la figura de la devolución de saldos como un beneficio económico al que tendrán derecho quienes a las edades mínimas de 57 años para las mujeres y 62 para el caso de los hombres, “...no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, suma dineraria que será igual al capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, cuando así lo soliciten; revelando así, la indiscutible naturaleza subsidiaria de esta prestación.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, frente al carácter residual del beneficio de la devolución de saldos, en sentencias SL6558 de 2017 y SL1142 y SL3470 ambas de 2021, apuntaló:

*La devolución de saldos es un beneficio contemplado en la regulación de seguridad social, de carácter subsidiario, que se concede en el régimen de ahorro individual a las personas afiliadas que, al llegar a la edad definida para pensionarse por vejez, no cumplen los requisitos legales mínimos para ello, y por el solo hecho de haber sido parte del sistema y contribuido al mismo, tienen derecho a que le reintegren los saldos acumulados para que no queden totalmente desamparados en la etapa de la vejez.*

### 2.3.2 Del Caso Concreto

Revisado entonces los medios de convicción que fueran adosados en el acontecer judicial, se colige que a la impulsora de juicio le asiste derecho al reconocimiento de un bono pensional tipo A, en la medida en que, además de haber efectuado para el año 1997, un traslado de RPMPD al RAIS, contaba a esa data con más de 150 semanas cotizadas (págs.7 a 9, 73 a 77 y 82 a 83 doc.01, carp.01). Asimismo, probado se tiene que la redención de este bono debe

ser en la modalidad de anticipado, pues la solicitud obedece al interés en el reconocimiento de una devolución de saldos, la que dicho sea de paso, fue radicada el 16 de abril de 2019 (pág.79, doc.01, carp.01); momento a partir del cual la AFP debía dar inicio a las gestiones ante el emisor y el contribuyente del bono pensional a fin de obtener su pago, estableciendo *“...dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes la historia laboral del afiliado con base en los archivos que posea y la información que le haya sido suministrada por el afiliado; y solicitando a quienes hayan sido empleadores del afiliado, o a las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere cotizado, que confirmen, modifiquen o nieguen toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono”*<sup>16</sup>; no estando sujeta ni al término ni a las sanciones contempladas en el 2.2.16.1.22 del Decreto 1833 de 2016, pues sin el ánimo de ser reiterativo, las consecuencias por la infracción de esta disposición, incumbe de manera exclusiva y excluyente, al emisor y al contribuyente del bono, mas no a los demás sujetos que participan en su trámite.

De lo hasta aquí discurrido, de cara al marco jurídico esbozado por la parte actora en el recurso de alzada, es dable afirmar por esta Sala de Decisión, sin ambages, que la decisión adoptada por el juzgador de instancia debe ser confirmada, toda vez que, es evidente se muestra que la parte accionante no cuestiona la conducta desplegada por el emisor ni por el contribuyente del bono pensional, sino que por el contrario, su esfuerzo está dirigido a obtener el pago de intereses moratorios a la convidada AFP COLFONDOS S.A., sanción que resulta ajena e inviable, conforme con la responsabilidad y el rol que detenta esta administradora dentro del antedicho trámite; pues de comprenderse así el asunto, se estaría entregando una patente de corso para el establecimiento, *de facto*, de un régimen sancionatorio ecléctico y acomodaticio que responda a los intereses y a la conveniencia de cada afiliado, resultando por tanto inane auscultar si la AFP incurrió o no en una dilación injustificada en la presentación de la solicitud ante el emisor del bono pensional, por la irrefutable improcedencia de los intereses de mora que deprecia la pretensora, y aún en gracia de discusión, la parte actora no se preocupó por arrimar al plenario los elementos que dieran cuenta de la dilación en el trámite en la confirmación de la historia laboral, o bien en la solicitud de emisión del bono pensional ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con todo, es de aclarar aquí y ahora que, la violación al término de 4 meses concedido a las administradoras en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento pensional, trae como consecuencia la causación de los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, empero, dicha sanción opera sobre las mesadas pensionales insolutas y no frente a la devolución de saldos que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala.

---

<sup>16</sup> Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.7.8.

Como colofón de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada AFP COLFONDOS S.A., de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN.

### **3. COSTAS**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en vista de que el fallo fue estudiado en bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de la promotora del juicio MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN, no se impondrán costas procesales.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **4. RESUELVE**

**PRIMERO:** CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por MARÍA ADELFA RODRÍGUEZ DE HOLGUÍN, en contra de la AFP COLFONDOS S.A., conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.


**SEGUNDO:** SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES  
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario